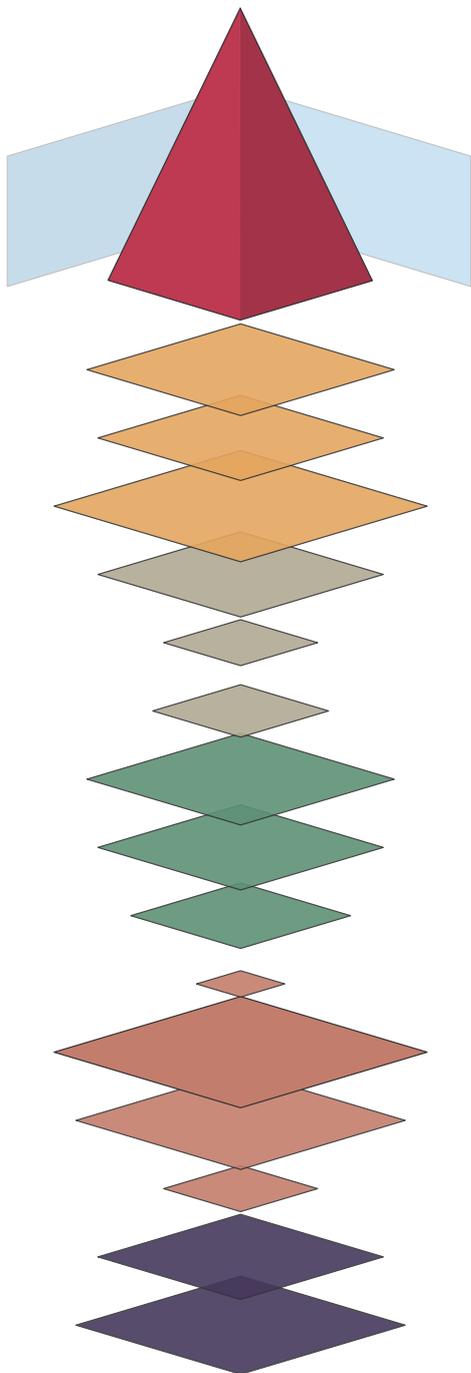




HONDURAS



7,05

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

13.º de 193 países

5.º de 35 países americanos

2.º de 8 países de América Central



MERCADOS CRIMINALES 6,00

TRATA DE PERSONAS 7,00

TRÁFICO DE PERSONAS 6,50

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN 8,50

TRÁFICO DE ARMAS 6,50

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 3,50

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES 4,00

DELITOS CONTRA LA FLORA 7,00

DELITOS CONTRA LA FAUNA 6,50

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 5,00

COMERCIO DE HEROÍNA 2,00

COMERCIO DE COCAÍNA 8,50

COMERCIO DE CANNABIS 7,50

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 3,50

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA 6,50

DELITOS FINANCIEROS 7,50



ACTORES CRIMINALES 8,10

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 8,50

REDES CRIMINALES 7,50

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 8,50

ACTORES EXTRANJEROS 8,00

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO 8,00



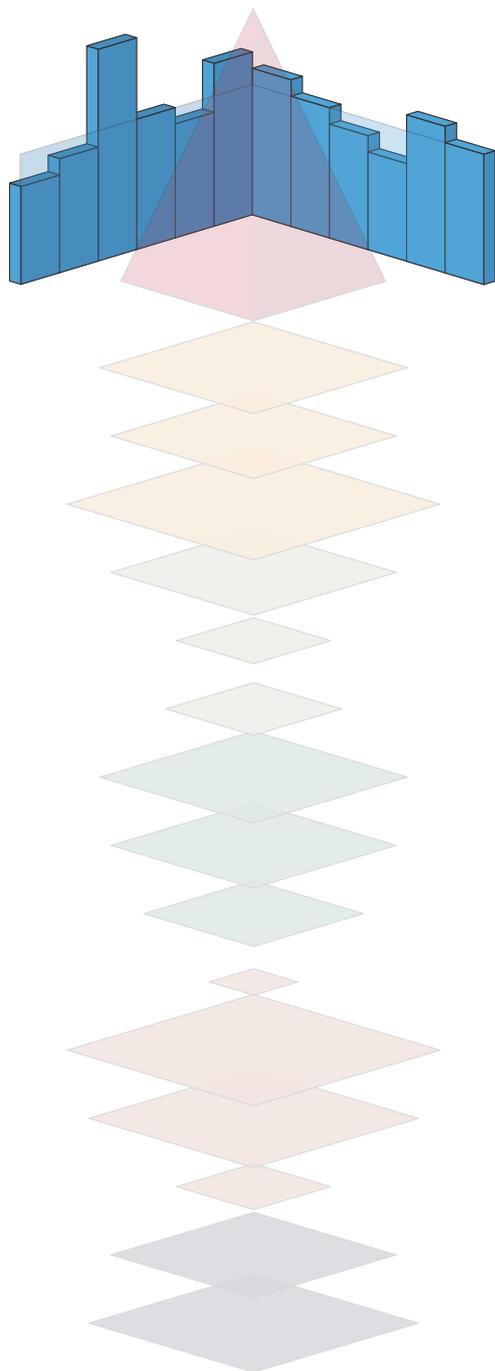
4,08

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA





HONDURAS



4,08

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

127.º de 193 países

26.º de 35 países americanos

4.º de 8 países de América Central

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	3,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6,50
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	4,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	3,50
CUERPOS DE SEGURIDAD	5,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	4,50
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4,00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	3,50
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	3,00
PREVENCIÓN	4,50
ACTORES NO ESTATALES	4,00



7,05

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD



MERCADOS CRIMINALES 6,00



ACTORES CRIMINALES 8,10



CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

La trata de seres humanos es un problema considerable en Honduras, debido al elevado número de personas que atraviesan el país para llegar a Estados Unidos y a otros países, como Belice, El Salvador, Guatemala y México. La vulnerabilidad de las víctimas ha aumentado, debido al aumento del desempleo, la reducción de los ingresos laborales, la violencia de las bandas, la discriminación de género y la violencia doméstica. Los niños indígenas y afrodescendientes corren el riesgo de ser explotados, debido a la discriminación racial. Muchas víctimas de la trata se ven obligadas a trabajar como vendedoras ambulantes, empleadas domésticas y traficantes de drogas. También son explotadas para el trabajo sexual.

Los delincuentes utilizan las redes sociales para coordinar y transportar personas a través del Triángulo Norte de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador). Las caravanas de personas ofrecen protección a quienes huyen de amenazas internas, pero a menudo son objetivos de grupos de delincuencia organizada, que las secuestran y piden rescate por ellas. A pesar de los riesgos, las víctimas siguen contratando a contrabandistas, con la esperanza de una mayor seguridad en la ruta. Las repercusiones socioeconómicas de la pandemia de la COVID-19 y las catástrofes naturales han aumentado la vulnerabilidad de las víctimas actuales y potenciales. La violencia, la extorsión y el tráfico de drogas en Honduras y las regiones circundantes siguen fomentando la emigración a países como Estados Unidos.

La extorsión es una fuente importante de ingresos para los grupos mafiosos de Honduras. Para eludir la aplicación de la ley, los grupos delictivos suelen obligar a los niños a cobrar las extorsiones en su nombre y aumentan sus ingresos, obligando a las víctimas a pagar por servicios no prestados. El sector del transporte se ha convertido en una de las industrias más peligrosas de Honduras, debido a estas prácticas ilícitas. Se denuncian pocos casos de extorsión, debido a la colaboración entre funcionarios militares y policiales y actores criminales. La extorsión desde el sistema penitenciario es habitual y la competencia territorial entre grupos delictivos impulsa este delito. La pobreza también impulsa a las personas de bajos ingresos a dedicarse a la extorsión, haciéndose pasar por miembros de grupos delictivos, para alimentar o proteger a sus familias.

TRÁFICO

La laxitud de las leyes sobre armas y la inestabilidad política hacen de Honduras un mercado atractivo para el comercio ilícito de armas, en el que participan diversos actores, como narcotraficantes, bandas criminales, funcionarios corruptos y lugareños que quieren evitar el largo proceso de registrar la propiedad de las armas. Las armas de fuego ilícitas se introducen de contrabando en Honduras por diversos medios, como el contrabando de piezas de armas en vehículos de transporte y la ocultación de armas en contenedores de importación legales. El marco legal de las armas de fuego en Honduras está lleno de lagunas y en gran medida no se aplica y los funcionarios corruptos agravan el problema, proporcionando armas del mercado negro. Como consecuencia, en Honduras se registran altos índices de violencia y la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego ilícitas. Los grupos delictivos que operan en Honduras han empezado a comprar armas más modernas y potentes, adecuadas para la guerra urbana, a grupos delictivos mexicanos y a funcionarios corruptos de los países vecinos.

Aunque no se cree que haya grupos delictivos estructurados implicados en el mercado de falsificaciones de Honduras, a menudo se incautan productos falsificados, como medicamentos y ropa, en almacenes temporales, tiendas y farmacias de todo el país. Aunque el comercio de productos falsificados en Honduras no es significativo, la economía del país está predispuesta a la exportación de este tipo de productos.

Los grupos delictivos, en particular las bandas, se dedican al comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales, como refrescos, cigarrillos y bebidas alcohólicas. El contrabando de productos sujetos a impuestos especiales está vinculado a varios puntos de entrada ilícitos, incluidos puntos aduaneros y puntos ciegos. Las rutas de contrabando se alinean con las utilizadas por las empresas legales de comercio internacional, que buscan sacar provecho de las zonas de libre comercio en Colón (Panamá) y Corozal (Belice). Las bebidas alcohólicas vendidas ilícitamente representan cerca de una cuarta parte de todo el consumo nacional de alcohol. El contrabando de productos sujetos a impuestos especiales de origen chino se origina con el transporte de China a México, luego a Belice y finalmente a Honduras, a través de Guatemala o El Salvador. El comercio ilícito de productos sujetos a impuestos especiales repercute notablemente en las pérdidas de ingresos del país y también puede contribuir al crecimiento de los grupos delictivos de la región.

MEDIOAMBIENTE

Honduras se enfrenta a diversos problemas relacionados con la tala ilícita, en la que están implicados madereros, campesinos sin tierra, narcotraficantes, ganaderos y especuladores con la conversión de tierras agrícolas. La caoba y el cedro son los principales objetivos de los traficantes, que exportan la madera, chapas o productos de madera a países como China, Hong Kong y Estados Unidos. Estos productos ilícitos suelen viajar por las mismas rutas que las drogas, lo que ayuda a ocultar los cargamentos de estupefacientes en los buques de carga. Además, el establecimiento de plantaciones de hoja de coca, pistas de aterrizaje secretas y laboratorios de drogas asociados a la industria del narcotráfico en Honduras contribuyen sustancialmente a la deforestación. Los funcionarios corruptos de Honduras a menudo apoyan las operaciones de tala ilegal, proporcionando permisos falsos, que permiten que la madera traficada se mezcle con la carga legal en los aserraderos, antes de ser exportada. La tala ilegal se ha relacionado con tasas de homicidios más elevadas en algunas zonas del país.

En Honduras se explotan una gran variedad de especies con distintos fines, como mascotas exóticas, consumo y partes del cuerpo. A menudo se matan jaguares en respuesta a ataques de ganado y se venden para obtener ingresos extras y con frecuencia se trafica con iguanas, tortugas y víboras. El comercio se produce a escala local e internacional, con huevos de guacamayo traficados entre Honduras y El Salvador y partes de jaguar potencialmente vendidas a ciudadanos chinos. Los precios de los animales silvestres objeto de tráfico varían en función de la especie y de si se destinan a mercados locales o extranjeros. El comercio ilícito de cohombres de mar va en aumento y los barcos pesqueros extraen grandes cantidades de estas criaturas cada temporada. Los problemas normativos, como los funcionarios corruptos que aceptan sobornos por ignorar las cuotas de pesca legales, han hecho que el comercio ilegal sea más rentable que el legal.

Honduras posee importantes yacimientos de minerales, como oro, plata, zinc y plomo. Aunque la minería ilegal está tipificada como delito en el Código Penal hondureño, la población local sigue realizando operaciones informales de extracción de oro. El Gobierno ha reconocido el impacto negativo de la explotación de oro y de minerales y ha prometido prohibir la minería a cielo abierto y cancelar los permisos existentes para esta actividad. En Honduras se producen robos y contrabando de petróleo, a menudo vinculados a bandas criminales y a otros grupos, conocidos como «lateros».

DROGAS

Actualmente no hay pruebas de la existencia de un comercio considerable de heroína en Honduras. Sin embargo, recientes investigaciones policiales sugieren que los cárteles de la droga de las regiones septentrionales del país probablemente

estén cultivando plantas de adormidera, que podrían estar vinculadas a plantaciones de adormidera en países vecinos, como Guatemala. No obstante, la producción de adormidera en Honduras sigue siendo relativamente baja y la demanda de heroína es mucho menor que la de drogas como el fentanilo.

Honduras sirve principalmente como un país de tránsito clave para la cocaína que se trafica a través del istmo centroamericano hacia México y Estados Unidos. A pesar de la creciente represión gubernamental, el tráfico de drogas sigue siendo una lucrativa fuente de ingresos para las bandas criminales locales. El creciente descubrimiento de laboratorios de drogas y de plantaciones de hoja de coca en el país sugiere que Honduras también se está convirtiendo en un país de origen para el mercado regional del tráfico de cocaína. La corrupción de alto nivel entre las fuerzas de seguridad, las autoridades judiciales y otras autoridades gubernamentales de Honduras facilita el tráfico de cocaína.

Honduras tiene un notable mercado de cannabis, con grupos mafiosos y otros grupos delictivos, incluidas bandas callejeras locales, implicados en la producción y el microtráfico en el país. El cannabis hondureño se vende principalmente a lo largo de la costa atlántica de Guatemala y a los turistas que visitan Belice y se cree que los mayoristas actúan como intermediarios entre las bandas locales y las organizaciones de narcotráfico más grandes.

La relación entre Honduras y el comercio mundial de drogas sintéticas no está clara, ya que no existen pruebas significativas de que el país produzca drogas sintéticas para su exportación internacional. Sin embargo, se han producido múltiples incautaciones de precursores químicos de drogas sintéticas, como efedrina y pseudoefedrina, en tránsito a través de Honduras hacia los países vecinos. Se cree que grandes narcotraficantes han suministrado efedrina a México en años anteriores. Aunque existe cierta preocupación de que Honduras pueda convertirse en un centro de distribución de fentanilo, debido a la escasa capacidad institucional y a los vendedores de origen hondureño que se encuentran en los mercados de la web oscura, se carece de datos recientes sobre el consumo interno de drogas sintéticas. También ha aumentado la venta de cannabis alterado químicamente, que en su mayor parte es llevada a cabo por grupos mafiosos activos en el país.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

Los actores criminales en Honduras, especialmente los vinculados a las pandillas, se han involucrado en delitos ciberdependientes con mayor frecuencia, recurriendo al hackeo, al sabotaje informático y a ataques de ransomware, mediante tácticas tecnológicas avanzadas. Empresas nacionales, bancos y medios de comunicación han denunciado cada vez más ser víctimas de ciberataques. Los sitios web de las administraciones públicas también han sido

objeto de ataques, en los que los delincuentes utilizan sus conocimientos cibernéticos para penetrar en las plataformas informáticas institucionales.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros son frecuentes en Honduras y suelen estar relacionados con los partidos políticos y la corrupción generalizada en el aparato estatal. Los políticos de alto rango son acusados con frecuencia de malversar los ingresos del Estado, que luego se desvían para financiar campañas políticas. Los tipos más comunes de corrupción vinculados a delitos financieros en el país incluyen el fraude en la contratación pública, la evasión fiscal, la malversación de fondos y la fuga de capitales, que tienen importantes repercusiones macroeconómicas. Estos delitos son perpetrados por diversos actores corruptos y criminales, incluidos funcionarios gubernamentales a nivel local y nacional, actores del sector público y privado, elementos del crimen organizado, organizaciones financieras internacionales e incluso Gobiernos extranjeros. Además, las actividades fraudulentas a través de sitios web falsos y de tácticas de phishing han aumentado en las instituciones bancarias hondureñas. Como resultado, la delincuencia financiera cibernética sigue ocurriendo sistemáticamente y con impunidad en el país.

ACTORES CRIMINALES

Los grupos mafiosos que operan en Honduras están implicados en una serie de actividades delictivas, como el tráfico de drogas, el robo de coches y la extorsión. Los ingresos generados por el narcotráfico han contribuido al crecimiento y la sofisticación de estos grupos. Existen dos grupos mafiosos principales en Honduras y ambos emplean la violencia extrema y la extorsión para controlar los territorios en los que operan. A pesar del reciente descenso de las tasas de homicidios domésticos, Honduras sigue siendo uno de los países más violentos del mundo. Durante la pandemia de la COVID-19, los grupos mafiosos de Honduras se abstuvieron de extorsionar, lo que les permitió entrar en la esfera política, financiando las campañas de sus aliados para cargos municipales. Además, los grupos transportistas, formados por redes familiares, ayudan a los grupos mafiosos en actividades delictivas, como la logística del transporte, la seguridad de la carga y el blanqueo de dinero.

El soborno y la corrupción desempeñan un papel importante en las operaciones de los grupos de delincuencia organizada, con profundos vínculos políticos con las fuerzas de seguridad locales y los funcionarios públicos que facilitan sus actividades. Los funcionarios corruptos de los distintos niveles de Gobierno crean oportunidades para la delincuencia organizada e incluso construyen infraestructuras y transportes, necesarios para las entidades delictivas. Las fuerzas de seguridad del Estado están implicadas en los mercados del tráfico de armas y de drogas. En abril del 2022, un expresidente fue extraditado a Estados Unidos por su implicación en el tráfico de drogas y en el de armas, así como por utilizar ingresos relacionados con las drogas para financiar campañas políticas.

Las entidades delictivas extranjeras, en particular las redes de narcotraficantes colombianos y mexicanos, operan en Honduras a través de pequeños grupos de emisarios ubicados en grandes ciudades y regiones fronterizas. Estos grupos se dedican a actividades de producción de drogas, como el cultivo de adormidera y el procesamiento de cocaína en laboratorios dentro de Honduras, y subcontratan a grupos de transportistas hondureños para facilitar el transporte ilícito de drogas hacia el norte, con destino a EUA, a través de Guatemala. Las redes delictivas centroamericanas y chinas participan en actividades ilícitas locales, como el contrabando de personas.

Los actores del sector privado, como bancos, compañías de seguros y empresas de remesas, desempeñan un papel considerable en las actividades ilícitas, especialmente la corrupción, facilitando el flujo de ingresos ilícitos. Las entidades delictivas a menudo poseen o explotan las cuentas bancarias de empresas del sector privado, como hoteles, para blanquear ingresos relacionados con el narcotráfico y otros ingresos de origen delictivo. Además, las élites empresariales de Honduras tienen una notable influencia sobre el sistema judicial estatal, lo que exacerba la corrupción, al manipular los procesos legales para evitar las consecuencias de sus acciones.

Las redes delictivas hondureñas colaboran con otros grupos delictivos, incluidos los actores estatales y sus homólogos extranjeros, para facilitar diversos mercados de delincuencia organizada, como el tráfico de drogas, la trata de personas y el tráfico de armas. Estas redes diversifican sus actividades, atentando contra grupos transportistas y robando cargamentos de droga a lo largo de las rutas de contrabando.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

El presidente recientemente elegido prometió reformar las instituciones del Estado, rechazando el crimen organizado y promoviendo el respeto generalizado de los derechos humanos. En los últimos años se han aplicado varias medidas para luchar contra el crimen organizado, entre ellas la restitución del antiguo jefe de la Policía Nacional. Sin embargo, la nueva administración heredó un aparato estatal muy corrupto, que incluye instituciones de seguridad demasiado corruptas o débiles para combatir la impunidad. Además, el país ha tenido que hacer frente a las dificultades económicas provocadas por la pandemia de la COVID-19, la tormenta tropical Eta y el huracán Iota. Desde su toma de posesión, los nuevos dirigentes también se han esforzado por combatir la corrupción y mejorar la transparencia del Gobierno. Uno de esos esfuerzos fue instar a los funcionarios de la ONU a crear una comisión internacional contra la corrupción en Honduras. Sin embargo, la corrupción sigue representando una importante amenaza para la nueva administración y para la seguridad del Estado hondureño.

Además, Honduras depende en gran medida de la ayuda exterior y su principal socio internacional es Estados Unidos. El Gobierno estadounidense ha proporcionado diversas formas de ayuda, como el desarrollo de capacidades e inteligencia contra la delincuencia y paquetes de ayuda económica para combatir la corrupción y la violencia. Otros gobiernos extranjeros y ONG internacionales han puesto en marcha programas anticorrupción y de reducción de la pobreza en Honduras. Sin embargo, la debilidad de los marcos institucionales, la corrupción y la falta de capacidad de las partes interesadas han obstaculizado la aplicación efectiva de estos programas. Honduras cuenta con un marco legislativo que aborda una serie de actividades ilícitas asociadas al crimen organizado, como la malversación, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y la trata de personas. Sin embargo, la aplicación de la legislación contra el crimen organizado sigue siendo limitada, debido a la corrupción y a la escasa capacidad de las fuerzas de seguridad. Aunque el Código Penal del país impone penas severas por pertenencia a organizaciones delictivas, las vagas definiciones legales de pertenencia a bandas siguen dando lugar a detenciones arbitrarias, basadas en las apariencias.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial de Honduras está plagado de corrupción, falta de financiación y politización, lo que lo hace ineficaz y contribuye a la impunidad judicial, especialmente en casos que implican a funcionarios del Estado y empresarios de las élites. Aunque en los últimos años se han realizado esfuerzos para mejorar el sistema, como la digitalización de los expedientes penales y el establecimiento de tribunales

especializados, el Poder Judicial sigue siendo un obstáculo considerable para la agenda anticorrupción de la actual administración. También existe una grave falta de garantías procesales en los casos civiles y penales, lo que da lugar a problemas de derechos humanos. Además, las prisiones hondureñas están notoriamente superpobladas, son insalubres y están supuestamente bajo el control de organizaciones criminales. La mayoría de los presos son preventivos y en algunos casos los propios funcionarios de prisiones carecen de integridad y de competencia.

Honduras cuenta con varios organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluida la Policía Nacional y unidades especializadas, encargadas de combatir el crimen organizado. Sin embargo, estos organismos carecen de recursos suficientes, como personal, equipos y combustible, y están plagados de corrupción. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se enfrentan a menudo a acusaciones de connivencia con organizaciones delictivas y de cometer abusos contra los derechos humanos. Para abordar estos problemas, el país ha puesto en marcha algunas reformas, como un programa de formación para nuevos reclutas y la cooperación con Estados Unidos, para detener y extraditar a personas buscadas por diversos delitos. A pesar de algunas mejoras, la capacidad policial del país sigue siendo limitada y los legados de las administraciones anteriores plantean importantes retos.

La ubicación y el terreno de Honduras convierten el país en un centro destacado para el tráfico regional de mercancías y personas ilícitas entre Sudamérica y Estados Unidos. La frontera entre Honduras y Guatemala es un lugar notable para los cruces clandestinos y la Policía fronteriza a menudo carece de los recursos necesarios para las patrullas. Además, la Marina hondureña carece sustancialmente de capacidad operativa, a pesar de contar con radares aéreos. El control territorial del Gobierno hondureño está limitado por una vasta cubierta forestal, que oculta diversas actividades delictivas en las zonas rurales y las redes criminales en las zonas urbanas. Sin embargo, en los últimos años, el Gobierno hondureño se ha esforzado por aumentar la seguridad en los puertos de entrada legales, invirtiendo en infraestructura y tecnología portuaria y colaborando con funcionarios estadounidenses para disuadir la migración irregular.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Honduras enfrenta obstáculos críticos en sus esfuerzos contra el lavado de dinero, debido a la falta de capacidad de investigación, cooperación interinstitucional y digitalización. Las leyes del país no se han aplicado eficazmente y la Unidad de Inteligencia Financiera carece de transparencia y de capacidad analítica. Al parecer, la Comisión de Banca

y Seguros carece de mecanismos internos completos. A pesar de recibir el apoyo de un asesor jurídico desplegado en EUA sobre cuestiones relacionadas con la delincuencia financiera, Honduras sigue siendo uno de los lugares de mayor riesgo para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en América del Sur. Para combatir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el país necesita mejorar su capacidad de investigación, la cooperación interinstitucional y los esfuerzos de digitalización.

El sistema de regulación económica de Honduras es muy corrupto, lo que ha propiciado el desarrollo de una gran economía informal, que beneficia a actores corruptos del sector privado. El país lucha por controlar los flujos monetarios y aduaneros y sus sectores financieros, incluidos los bancos, las cooperativas de crédito, el sector inmobiliario, la construcción, los operadores de cambio de divisas y los sistemas de envío de remesas, son vulnerables al blanqueo de dinero. Los procesos de contratación pública y las industrias basadas en el comercio, como la tala y la ganadería, se ven muy afectados por el crimen organizado. Las instituciones financieras del sector privado suelen tener mayor control sobre los activos del crimen organizado que las instituciones estatales, debido a la grave falta de recursos asignados a las instituciones estatales.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

El apoyo de Honduras a las víctimas de delitos es muy inadecuado, con pocos mecanismos para apoyar a las víctimas de la esclavitud moderna y programas de protección de testigos muy ineficaces, que carecen de capacidad institucional. Las víctimas que denuncian extorsión se han visto cada vez más obligadas a buscar la ratificación de sus denuncias en tribunales de extorsión controlados por bandas criminales. Las ONG ofrecen servicios de rehabilitación a las víctimas de la drogadicción.

Honduras carece de iniciativas de prevención en la lucha contra el crimen organizado y principalmente se centra en el aumento de la seguridad y la integridad territorial. Aunque han aumentado los esfuerzos para concienciar a la población sobre los riesgos relacionados con la cibernética, faltan campañas nacionales y regionales integrales, vinculadas a la prevención de la ciberdelincuencia. Además, las estrategias de prevención de la delincuencia se ven afectadas por las amenazas y la violencia física contra los denunciantes y los activistas contra la delincuencia, lo que hace que la mayoría de los delitos no se denuncien.

Honduras tiene un pobre historial en materia de libertad de prensa y los periodistas y los empleados de los medios de comunicación corren un alto riesgo de sufrir violencia y acoso, sobre todo si se alinean con voces de la oposición, contrarias al partido gobernante. Las fuerzas de seguridad del Estado, principalmente la Policía Militar y los miembros del Ejército, perpetrar los mayores niveles de acoso y violencia contra periodistas y empleados de los medios

de comunicación. La corrupción judicial desenfrenada se traduce a menudo en la condena y el encarcelamiento de periodistas acusados falsamente de difamación. Los ataques contra los defensores de los derechos humanos, incluidos activistas y periodistas, son habituales en el país. A pesar de estos problemas, los grupos de derechos humanos siguen oponiéndose públicamente a la corrupción, luchando por los derechos territoriales de los indígenas y expresando su preocupación por otras cuestiones destacadas relacionadas con los derechos humanos en Honduras.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.